

EDITORIAL

Las propuestas de reforma neoliberal en salud

La profesión médica, tan digna y solidaria, sufre en estos momentos una feroz arremetida de parte del poder político económico de la nación representado por el gobierno de la república. Existe una campaña de desprestigio eficientemente organizada y orquestada por todos los medios posibles. La prensa hablada, escrita y televisada del país apoya las consignas gubernamentales y se invierten desmesuradas cantidades de fondos provenientes de las arcas de Estado en el malévolo propósito. La consigna viene del exterior. El Gobierno pretende crear en el pueblo la convicción de que el estado de postración económica que vive la nación se debe fundamentalmente a los salarios devengados por los médicos, considerándolos privilegiados y aupando a la población a crear que muchas acciones de mejoría del sistema nacional de salud no pueden ser ejecutadas porque el dinero se consume en pagarle a los médicos. En la misma campaña se engloba a los maestros del país presentándolos también como privilegiados, superpagados y depredadores del presupuesto nacional.

Es menester que sepamos donde residen las causas de tan despreciables acciones.

El dinero proveniente del endeudamiento externo ha sido consumido a lo largo de los años por la corrupción de las camarillas que ostentan el poder político económico del país. El poder económico mundial reclama el pago de la deuda externa y por ello muestra su hegemonía y poderío imponiendo condiciones a países y regiones del mundo a través de los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial). La política central de estas gentes es la de hacer desaparecer al Estado como responsable de los programas de servicio público y organizar las cosas de tal forma que pasen a ser responsabilidad de actores privados cuya motivación es el lucro. Instituciones de Previsión Social como el IHSS y otros institutos se encuentran también en la mira con la expresa ambición de sustraerle los fondos de pensiones acumulados para transferirlos al usufructo de cadenas privadas de aseguramiento.

Planteadas así la política de país alimentada por mandato de los organismos financieros internacionales el gobierno se enfrenta al escollo de que, para hacer viables tales políticas de privatización, es menester saltar el obstáculo de las regulaciones laborales, especialmente de médicos y maestros, ya que estas regulaciones impiden avanzar en el propósito de privatizar los servicios públicos de salud, de seguridad social y de educación. Queda claro que por alcanzar un objetivo económico los poderes del país no han vacilado ni un momento en minimizar y degradar el noble ejercicio de la medicina y del magisterio. Resulta más sencillo hipertrofiar los defectos o deficiencias, que como excepción de la regla existen, que destacar los resultados exitosos.

Al proponerse suprimir y modificar las regulaciones laborales existentes el gobierno sabe que está violando principios fundamentales del derecho laboral, principalmente el de inviolabilidad de los derechos adquiridos por los trabajadores. El Gobierno aplica la táctica de negar sistemáticamente que está trabajando en las acciones denunciadas y enmascara sus propósitos proponiendo acciones colaterales o periféricas que finalmente conduzcan al alcance del objetivo central. Por ejemplo, cuando el Gobierno comenzó a observar el crecimiento del rechazo a la reforma de los estatutos hizo propalar la especie de que ya no había interés en modificar los estatutos y que solamente se sometería a revisión y cambio la ley del Servicio Civil, sin aclarar que dichos cambios apuntaban a la supresión o limitación del efecto regulador de los estatutos. Diseminó también la especie de que nada se privatizaría sino que solamente se pasarían los establecimientos a la responsabilidad de Organismos No gubernamentales (ONG).

Las caras asesorías contratadas por el gobierno para ejecutar tales acciones han recomendado la destrucción de la imagen de médico y del maestro como trabajadores del sistema público para lograr que la población general del país simpatice con las medidas de agresión gubernamental. Al quebrarse los Estatutos, el camino quedaría expe-

dito para lograr la privatización del sistema público de salud, de seguridad social y de educación.

La privatización del sistema de salud que se quiere imponer al pueblo hondureño es una estrategia fracasada en varios países. La inaplicabilidad de tales medidas se debe, sencillamente, a que nuestros pueblos, marcados por la más abyecta pobreza, no tienen capacidad para resistir el pago de servicios asistenciales privados. En países poderosos de la tierra los pueblos luchan por abolir tales sistemas que a todos luces rompen la equidad. Las familias se protegen con seguros médicos privados que les cubren los riesgos hasta donde su condición económica les permite. Para miles de familias sólo pagan protección para los riesgos básicos y enfrentan al alza constante de los precios de tales pólizas de seguro médico. Lógicamente que el pequeño grupo económicamente poderoso de los países y que también detenta el poder político disfruta de la capacidad de pagar la cobertura más amplia de aseguramiento privado.

Políticamente nuestro Colegio ha adquirido un elevado nivel de conciencia sobre este problema. No dudamos en afirmar que hace apenas dos años una gran mayoría de médicos mostraba una conducta indiferente en vista del desconocimiento que tenía de la situación. La Junta Directiva ha desplegado acciones bien programadas, sólidas y consistentes a lo largo y ancho del país. Ahora no hay médicos que desconozcan el tema. Se han cerrado filas evitar que el gobierno consolide las acciones. La posición de Colegio Médico ha derribado los sofismas de que el sueldo de los médicos es privilegiado, de que el traspaso de los hospitales a fundaciones Privadas

es beneficioso y de que la Secretaría de Salud debe desaparecer como entre ejecutor y quedar solamente regulador.

Pero la actividad más notable llevada a cabo por nuestro Colegio es la consolidación de históricas alianzas con los sectores populares del país. Es ahora muy común observar el trabajo conjunto entre dirigentes del Colegio Médico de Honduras y de movimientos populares y Centrales Obreras. Se lucha fuertemente en el frente político contra un gobierno que en ningún momento ha depuesto su determinación de lograr la privatización de los servicios públicos pasando por encima de los intereses de las grandes mayorías del pueblo hondureño. Se ha tenido que salir a la calle para denunciar las posiciones gubernamentales y se está en una etapa de lucha en la que más se necesita de la cohesión del gremio médico nacional, del fortalecimiento de las alianzas con los sectores populares y del afianzamiento de la voluntad del pueblo hondureño para luchar por la defensa de las instituciones públicas de salud, de seguridad social y de educación. La lucha será larga. El poderío económico nacional y mundial no abandonará por ahora sus propósitos y se aprovechará de cualquier flaqueza o fisura del frente Amplio de Lucha en Defensa del Sistema Público de Salud. Habrá que sostener el constante trabajo motivacional y organizacional bajo el liderazgo de la Junta Directiva y de las Delegaciones del Colegio en todo el país.

Carlos Godoy Arteaga
Pediatra Salubrista